

~~No Existe Forma de Exigir Cuentas Claras~~

Privatizaciones sin Final Feliz

- ★ Antes Sólo Lograron Ahondar Desigualdades Sociales
- ★ Hoy Siguen Ausentes las Instituciones Democráticas
- ★ Irresponsabilidad y Abusos Frustran las Esperanzas

LORENZO MEYER

Cuando el Estado mexicano pone en venta empresas valuadas en billones de pesos, como es hoy el caso, el observador no puede menos que ponerse en guardia, pues esas transacciones tienen lugar en un sistema de poder donde, de hecho, no existe manera efectiva de que la ciudadanía —supuesta detentadora de la soberanía— pueda exigir cuentas claras a los responsables de tan delicado e importante proceso.

Las dudas sobre los beneficios y las consecuencias de corto y largo plazos de la venta masiva de las propiedades estatales no son gratuitas, surgen tanto de la experiencia cotidiana como de la memoria histórica. Como se sabe, no es esta la primera vez que el Estado mexicano, en nombre de la modernidad, la eficiencia y el bien común, ha traspasado a particulares propiedades y concesiones. Algo similar ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando el gobierno liberal decretó e impuso —tras una lucha formidable— la desamortización de los bienes de "manos muertas": los de la Iglesia y los de las comunidades indígenas. La historia de esas ventas de bienes, aunada a la de concesiones a particulares de empresas que hasta entonces administraba el gobierno,

SIGUE EN LA PAGINA CATORCE

PRIVATIZACIONES

Sigue de la primera plana

no tuvo un final feliz, pues las enormes desigualdades sociales heredadas de la época colonial no desaparecieron sino que se anudaron y la modernización fue tan parcial que sus beneficios no tocaron a millones de mexicanos.

Es un hecho desafortunado pero innegable, que bajo cualquier régimen y en cualquier época, el manejo de la propiedad, de los dineros, de la información y, sobre todo, de la autoridad pública, se encuentra íntimamente ligado a la corrupción, al abuso y a la inequidad. Y eso es cierto hoy o hace quinientos años, lo mismo en el capitalismo que en el capitalismo, en países desarrollados y ricos que en subdesarrollados y pobres, en economías dominadas por la empresa estatal o en aquellas donde el Estado se contenta con "dejar hacer y dejar pasar".

La historia universal de la corrupción, irresponsabilidad e injusticia de quienes detentan el poder del Estado, en tanto más rica que su opuesto: la historia

de la honradez, el altruismo y la responsabilidad. Y eso es particularmente cierto en el caso mexicano. En realidad, todo indica que a lo más que se puede aspirar no es a eliminar sino a disminuir el grado de abuso del poder mediante la división de los poderes públicos —esa división que tanto recomendó Montesquieu— y la creación de toda una estructura institucional de pesos y equilibrios que permita a las diferentes fuerzas sociales exigir sistemática y efectivamente cuentas a la autoridad. Otra manera de decir lo mismo es ésta: sólo una vida realmente democrática puede hacer que el acto del político no se desvíe mucho de la norma. La democracia no es garantía contra el mal gobierno pero su ausencia lo asegura.

*

El actual gobierno mexicano —como muchos otros a lo largo y ancho del planeta— se ha dedicado, con gran entusiasmo y celo, a la tarea de poner a un buen número de empresas y responsabilidades del Es-

tado en manos de los particulares, de muy pocos, por cierto. Entre las razones que se esgrimen como argumento contundente para justificar la ola privatizadora es la enorme e innegable corrupción e ineficacia de las empresas estatales. El argumento, desafortunadamente, no es absurdo. Nadie en su sano juicio puede negar que en casi cualquier empresa estatal mexicana, en muchas oficinas de gobierno, en las mil y una actividades privadas que están sujetas a reglamentos e inspección oficiales, hay alguien que a la sombra del Estado sistemáticamente obtiene beneficios indebidos. En realidad, es posible argumentar que hace tiempo que la inversión estatal en las actividades productivas pasó su punto óptimo y que ahora es necesario devolver al mercado muchas de ellas. Sin embargo, hay que tener cuidado en cuáles actividades y cómo hacer su devolución, pues resulta que en el proceso mismo de enajenar la propiedad pública con objeto de eliminar fuentes de corrupción e in-

justicia puede generarse una nueva forma de inequidad, de concentración ilegítima de riqueza y poder, y hacer que el proceso privatizador dé resultados opuestos a los deseados. Y el mejor ejemplo de ese peligro, que debemos evitar, lo tenemos en la privatización que llevó a cabo el Estado liberal en el siglo pasado.

El Estado liberal del siglo XIX, espoleado por una combinación de ideología con una gran deuda interna y externa, una crisis permanente, que era a la vez fiscal, política, económica y social decidió vender a precios y en términos muy ventajosos para los compradores, las propiedades de la Iglesia católica, forzar la privatización de las propiedades de las comunidades indígenas y lanzar al mercado propiedades del Estado mismo, como fueron las minas de Fresnillo, ciertas salinas y enormes extensiones de terrenos baldíos. Y aquello que no se vendió acabó siendo alquilado o concesionado a la gran empresa privada —que en buena medida estaba en manos de los agiotistas mexicanos y extranjeros—, como fue el caso de los estancos del tabaco, de la pólvora o las casas de moneda y las aduanas mismas.

Todavía hoy día la controversia sobre el monto y los múltiples efectos de la desamortización efectuada por los liberales originales están abiertos a la discusión, pero de lo que no hay duda es que éstos no fueron, ni de lejos, lo benéficos que sus autores dijeron o pretendieron que serían. Al lograr México su independencia, la Iglesia Católica poseía, según las investigaciones de Jan Bazant, entre 20 y 25% de la propiedad urbana, con una participación más modesta en la propiedad rural. A mediados del siglo, en junio de 1856, Miguel Lerdo de Tejada en su calidad de secretario de Hacienda, puso en marcha la desamortización de "todas las fincas rústicas y urbanas" de las corporaciones civiles o eclesíásticas de la República. El objetivo de tan revolucionaria medi-

SIN FINAL FELIZ

da no era realmente dar recursos al erario —que, por otra parte, mucho los necesitaba— sino introducir definitivamente a México al sistema capitalista como única manera posible de modernización y destruir el poder de un enemigo político: el clero.

El proceso de ventas de las propiedades de las corporaciones se llevó a cabo con sus altas y bajas, pero finalmente la propiedad eclesiástica desapareció casi por completo y más de la mitad de las comunidades indígenas perdieron parcial o totalmente sus propiedades en beneficio de haciendas y ranchos. Una parte de los miembros de la pequeña clase media se beneficiaron de la venta de los bienes urbanos del clero, entre otros los propios líderes liberales, como el mismo Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Francisco M. Olaguibel, Ignacio Comonfort, etcétera. Sin embargo, quienes más y mejores bienes adquirieron no fueron las familias de comerciantes que tenían ya grandes fortunas y enormes cantidades de bonos gubernamentales devaluados que hicieron valer al ciento por

ciento en sus compras de inmuebles, como los Béistegui, Escandón, Limentour, Barrón, Rubio, Iturbe Verástegui, y otras familias similares, muchas de ellas francesas o españolas, y cuyos apechoncamientos de México a mediados del siglo pasado. El resultado es que, como bien lo ha demostrado el propio Jan Bazant, en la ciudad de México, una decena de perillidos llenan la historia sonas adquirieron dos tercios de la propiedad puesta en venta, y en los estados más de un tercio de las fincas vendidas quedaron en manos de 1% de los compradores. En una sociedad ya de por sí caracterizada por una enorme desigualdad, la venta por parte del Estado de los bienes urbanos de la Iglesia, simplemente contribuyó a concentrar más la riqueza, es decir, a aumentar la injusticia, la distancia entre los mexicanos.

Y lo mismo sucedió en el mundo rural. Ahí lo significativo no fue tanto que los grandes hacendados absorbieran las propiedades rústicas de la Iglesia, sino las de las comunidades indígenas y los terrenos bal-

díos. De esta manera el proyecto liberal de crear en México una economía agrícola capitalista basada en los propietarios medianos, los rancheros, a imagen y semejanza de la existencia en los Estados Unidos, casi nunca se materializó. Al contrario, ya sin las trabas que les había puesto la estructura colonial, en muchos lugares de México los grandes latifundistas llevaron a cabo una contrarreforma agraria que dejó al grueso de los mexicanos sin más medios para sobrevivir que la venta de su trabajo personal —Moisés González Navarro nos dice que en 1895 las nueve décimas partes de la población agrícola mexicana carecía de tierra— y que culminó en lo que fue una sociedad oligárquica, autoritaria e injusta en extremo: el Porfiriato.

Como todos sabemos, la modernización liberal dejó a un lado del camino del progreso a muchos mexicanos que resultaron inmoldernizables. A fin de cuentas, el carácter excluyente y concentrador de la riqueza de la política liberal facilitó el estallido de la Revolución mexicana. Hoy, el Estado mexicano pone nuevamente a disposición de

un puñado de mexicanos y sus socios extranjeros —Larrea, Slim, Abedrop et al.— empresas gigantes que, desde el punto de vista neoliberal, estaban en el equivalente moderno de las viejas “manos muertas” —Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, Cananea, los bancos, etcétera—, así como concesiones y apoyos para llevar adelante la nueva y supuestamente definitiva, modernización mexicana.

Desafortunadamente, este proceso modernizador tiene lugar en una situación en que el poder político se encuentra casi tan concentrado como estaba en el siglo pasado, y donde siguen ausentes las instituciones democráticas que permitan asegurar que esta nueva enajenación de los bienes de “manos muertas” llevará, por fin, a transformar a la sociedad mexicana en una comunidad nacional razonablemente justa, y no a una frustración más de las añejas demandas por llegar a constituir una nación mexicana no sólo moderna en lo económico sino una donde la equidad y la dignidad sean realidad cotidiana y no meras aspiraciones frustradas por la corrupción, la irresponsabilidad y el abuso del poder.